

C.A. de Concepción

Concepción, siete de febrero de dos mil veintitrés.

**Vistos:**

Compareció en este proceso **Rol N° 67.207-2022** del Libro Protección de esta Corte de Apelaciones, Andrés Kuncar Oneto, abogado, en nombre y representación de **Gloria Alejandrina Quiero Veloso**, abogada, e interpuso recurso de protección en contra del denominado “**Comité de Allegados Los Pinos**” liderado por Cristóbal Eduardo Castro Lisperguer, Francisca Nicole Cofré Manríquez y Diego Abraham González Pérez, todos domiciliados en el sector Santa Alicia de Dichato.

Dice que su representada es dueña y legítima poseedora del inmueble ubicado en Dichato, comuna de Tomé, el que de conformidad con sus títulos inscritos tiene una superficie de dos hectáreas y con los siguientes deslindes: norte y oriente, con propiedad de Forestal Bío Bío S.A.; sur, con predio El Molino de Forestal Arauco Limitada; y poniente, con lote o Parcela número Uno del Fundo Ranquilco. Precisa que la propiedad se encuentra inscrita a su nombre a fojas 1.279 N° 603 en el Registro de Propiedad del año 2020 del Conservador de Bienes Raíces de Tomé.

Expresa que en marzo de 2022, aproximadamente 23 familias, organizadas bajo el denominado “*Comité de Allegados Los Pinos*”, liderados por los recurridos, conforme la información con que cuenta su representada, se tomaron un predio particular, inmediatamente vecino al de su patrocinada, de propiedad de Inversiones RCV Limitada, denominado “Lote A-1 y Lote A-4 del Fundo Ranquilco”, de la comuna de Tomé.



Explica que, ante dicha “toma” su vecino interpuso recurso de protección, que lleva el Rol 8.512-2022 de esta Corte de Apelaciones, y que a la fecha d interposición de este recurso, (08 de septiembre de 2022) estaba en estado acuerdo. Los recurridos en dicho proceso reconocieron la toma, pero la justificaron en que se trataría de una ocupación de terrenos municipales. Pero la Municipalidad de Tomé, que también informó en dichos antecedentes, confirmó que el terreno ocupado no era municipal sino del recurrente de dicho proceso.

Agrega que durante el fin de semana del 27 al 28 de agosto, personas integrantes del mismo Comité, liderados por los recurridos ya mencionados, ingresaron a la propiedad de su representada y, según ella se informó, cortaron árboles y empezaron a ocupar la propiedad, supuestamente para hacer huertas, pero la verdad es que se han instalado de forma ilegal, tal como lo hicieron en la propiedad vecina e incluso levantaron el cerco que su parte había fijado en su deslinde y pusieron otro para marcar la superficie que han ocupado.

Dice que la ocupación reciente se puede apreciar de las fotografías insertas en su recurso. Añade que la segunda foto, muestra la tala de árboles y la colocación de hebras de alambre para demarcar lo ocupado.

Afirma que de esta forma, se recurre concretamente contra el acto de auto tutela consistente en el hecho de ingresar ilegalmente al predio de su representada, ocupar ilegalmente el mismo, talar árboles e incluso instalar cercos en su interior, acto que afecta el derecho de dominio de la recurrente sobre su inmueble, a fin de que esta Corte de Apelaciones adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección



de la afectada.

Precisa que dicho acto de auto tutela, como queda de manifiesto, afecta, perturba y/o amenaza el legítimo derecho de dominio así como la posesión inscrita y material que su patrocinada tiene sobre su inmueble, dominio cuya protección está garantizado constitucionalmente en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental.

Concluye solicitando que se acoja este recurso, declarando que los recurridos han obrado ilegalmente al ingresar al predio de su representada, levantar cercos, instalar otros, talar árboles, ocupar parte del terreno y, en general, realizar actos de ocupación y que, por lo mismo, se les condene a desocupar el terreno y retirar todo cerco, instalación o edificación que hubieren establecido y a reponer el cerco divisorio existente antes de la ocupación ilegal, en el plazo de tercero día o en el plazo que indique esta Corte, desde que la sentencia quede firme, y además se les ordene abstenerse de realizar todo tipo de actos que importen perturbar, embarazar y/o privar a los recurrentes de su dominio sobre su inmueble, sin perjuicio de las demás medidas que esta Corte estime pertinentes adoptar para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los afectados, con costas.

**Informó** Noelia Gajardo Lagos, Directora de Desarrollo Comunitario de la I. Municipalidad de Tomé, quien cumpliendo lo ordenado por esta Corte en el sentido de informar sobre las acciones desarrolladas por el municipio, en apoyo de las familias del Comité "El Pino", localidad de Dichato, indica que por medio de esa Dirección, no se han ejercido labores tendientes a apoyar la instalación irregular de familias en el terreno indicado por esta Corte de Apelaciones, en el presente recurso de protección.



Agrega que no es parte de las políticas sociales de ese municipio interceder en apoyo de familias con carencias habitacionales, en tomas irregulares de terreno, pues siempre se ha trabajado por las vías que corresponde, en directa coordinación con el SERVIU.

**Informó** el Retén de Carabineros de Dichato señalando, en lo medular, que personal de dicha entidad concurrió al sector del Lote A-1 y Lote A-4 Fundo Ranquilco de Dichato para notificar de esta acción constitucional a los recurridos, oportunidad en que se obtuvieron fotografías para situar el lugar en mención, constatando la existencia de varias viviendas ya terminadas y otras en construcción, con sus cercos y delimitaciones de cada terreno asignado en la zona indicada como ocupación ilegal denunciada, las que se indican en cada una de las fotografías que insertan en su informe.

Se prescindió del informe de los recurridos por no haberlo evacuado oportunamente.

Se trajeron los autos en relación.

**Con lo relacionado y considerando:**

1º) Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye, jurídicamente, una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable para la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto



es, contrario a la ley o arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías constitucionales protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto;

2º) Que el acto que el recurrente estima ilegal y arbitrario es el hecho que en marzo de 2022, veintitrés familias, organizadas bajo el denominado “*Comité de Allegados Los Pinos*”, liderados, conforme la información con que cuenta su representada, por los recurridos mencionados en lo expositivo de este fallo, se tomaron un predio particular, inmediatamente vecino al de su patrocinada, de propiedad de “*Inversiones RCV Limitada*”, denominado “*Lote A-1 y Lote A-4 del Fundo Ranquilco*”, de la comuna de Tomé.

Explica que dicho vecino interpuso el recurso de protección Rol 8.512-2022 de esta Corte de Apelaciones, el que a la fecha de interposición de la presente acción constitucional se encontraba en estado de acuerdo (actualmente se encuentra fallado y en apelación ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia). Precisa que los recurridos en dicho proceso reconocieron la toma, pero la justificaron en que se trataría de una ocupación de terrenos municipales. Sin embargo, la Municipalidad de Tomé, que también informó en dichos antecedentes, confirmó que el terreno ocupado no era municipal sino del recurrente de ese proceso judicial.

Agregó que durante el fin de semana del 27 al 28 de agosto, personas integrantes del mismo Comité, liderados por los recurridos ya mencionados, ingresaron a la propiedad de su representada, cortaron árboles y comenzaron a ocupar el predio de su patrocinada para supuestamente para hacer huertas, pero



la verdad es que se han instalado de forma ilegal, tal como lo hicieron en la propiedad vecina, e incluso levantaron el cerco que la actora había fijado en su deslinde y pusieron otro para marcar la superficie que han ocupado.

Dice que la ocupación reciente se puede apreciar de las fotografías insertas en su recurso. Añade que la segunda foto, muestra la tala de árboles y la colocación de hebras de alambre para demarcar lo ocupado.

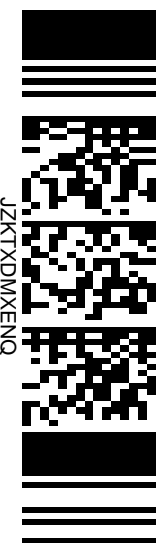
Precisa que dicho acto de auto tutela, como queda de manifiesto, afecta, perturba y/o amenaza el legítimo derecho de dominio así como la posesión inscrita y material que su patrocinada tienen sobre su inmueble, dominio cuya protección está garantizado constitucionalmente en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental;

**3°)** Que no es un hecho controvertido por las partes que existe ocupación ilegal del terreno de la parte recurrente, pues ello se aprecia de las fotografías acompañadas tanto por la parte recurrente como por Carabineros de Chile, Retén Dichato.

En algunas de dichas fotografías se aprecian restos de un cerco con estacas cortadas, de reciente data, que correspondería al antiguo cerco instalado por la actora que fue reemplazado por otro construido por los recurridos;

**4°)** Que, en efecto, apreciadas las citadas fotografías conforme a las reglas de la sana crítica, aquellas permiten tener por acreditado que existe un cerco de reciente data, como se puede observar del estado de las estacas y de las hebras de alambre prácticamente nuevas;

**5°)** Que, así las cosas, como ya se dijo, resulta ser efectiva la ocupación del predio de la actora y la instalación de un nuevo cerco por parte de los recurridos, el que se aprecia que fue



instalado en un lugar distinto del antiguo, ocupando, sin derecho alguno, el terreno de la recurrente en la parte que deslinda con el inmueble ocupado o “*tomado*” por los recurridos, materializando un deslinde hasta ahora inexistente, alterando así el *statu quo* vigente e incurriendo en una actuación que resulta contraria a derecho, amén de ilegal y arbitraria, toda vez que ejercieron un acto de autotutela, proscrito por nuestro ordenamiento, según la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°3 inciso 5° de la Constitución Política de la República de Chile, constituyéndose en una comisión especial (en este sentido, sentencia de la Excma. Corte Suprema de 01 de marzo de 2021, rol 150.547-2020), vulnerando asimismo el derecho de propiedad de la parte recurrente sobre el predio individualizado en lo expositivo de este fallo, garantizado en el N°4 de la disposición constitucional recién mencionada;

6°) Que en razón de lo reflexionado y concluido precedentemente, se accederá a la protección impetrada en la forma que se indicará en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Gloria Alejandrina Quiero Veloso, abogada, en contra del denominado “*Comité de Allegados Los Pinos*”, que sería liderado por Cristóbal Eduardo Castro Lisperguer, Francisca Nicole Cofré Manríquez y Diego Abraham González Pérez, sólo en cuanto se ordena a la parte recurrida desocupar el terreno de la actora y retirar todo cerco, instalación o edificación que hubieren establecido en dicho lugar, en el plazo de 20 días



hábiles, desde que esta sentencia quede firme y, además se les ordena abstenerse de realizar todo tipo de actos que importen perturbar, embarazar y/o privar a la parte recurrente de su dominio sobre el inmueble singularizado, autorizándose a la actora a reponer el cerco divisorio existente antes de la ocupación ilegal.

Regístrese y archívese virtualmente en su oportunidad.

Redacción del ministro Claudio Gutiérrez Garrido.

**Rol N° 67.207-2022. Protección.-**





Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción integrada por los Ministros (as) Claudio Gutierrez G., Vivian Adriana Toloza F. y Ministro Suplente Francisco Javier Berrios V. Concepcion, siete de febrero de dos mil veintitrés.

En Concepcion, a siete de febrero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

